

20

INFORME
ESPAÑA
2 0 1 3

una interpretación
de su realidad social



Fundación Encuentro

Equipo de dirección y edición

José María Martín Patino, Presidente • **Agustín Blanco**, Director General • **Antonio Chueca**, responsable del Departamento de Datos • **Giovanna Bombardieri**, Secretaria • **Teresa Herreros** • **Beatriz Manzanero**

Equipo de colaboradores:

Consideraciones Generales. **Xavier Martínez Celorrio**, Universidad de Barcelona y **José M^a Martín Patino** • *Parte Segunda.* **Ignacio Buqueras**, Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Participa: **Agustín Blanco**, Fundación Encuentro • *Capítulo I.* **María Isabel Martínez** y **Nuria Guilló**, Abay Analistas. Participan: **Elvira González Gago**, Fundación Tomillo, y **María Dolores Liceras** y **Elvira González Santamaría**, expertas en mercado laboral • *Capítulo II.* **Josune Aguinaga**, UNED, y **Domingo Comas**, Fundación Atenea. Participan: **Julio Camacho**, Instituto de la Juventud, y **Elena Rodríguez San Julián**, Sociológica Tres • *Capítulo III.* **Benjamín García Sanz**, Universidad Complutense. Participa: **Antonio Abellán**, CSIC • *Capítulo IV.* **Chaime Marcuello** y **Carmen Marcuello**, Universidad de Zaragoza. Participan: **Guillermo Fernández**, Cáritas Española, **Mónica Sánchez**, Plataforma del Voluntariado de España, y **Beatriz de Miguel**, Fundación ONCE • *Capítulo V.* **Manuel Valenzuela Rubio**, Universidad Autónoma de Madrid.

Y las siguientes Instituciones: Instituto Nacional de Estadística • Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles • Cáritas Española • Fundación ONCE • Plataforma del Voluntariado de España • Instituto de la Juventud

ÍNDICE

PARTE PRIMERA: CONSIDERACIONES GENERALES

	Claves para una interpretación de la crisis	XIII
1.	Hacia un diagnóstico compartido desde el realismo crítico	XV
2.	Desterrar la política de exclusión y abrirse a la política de inclusión	XVIII
3.	El consenso por la reforma y democratización de los partidos políticos	XX
4.	Las fortalezas de una ciudadanía responsable	XXIII
5.	La renovación institucional que hemos de decidir	XXVII

Parte Primera

CONSIDERACIONES GENERALES

Claves para una interpretación de la crisis

La España de 2013 vive una nueva encrucijada histórica y compleja donde se superponen múltiples problemas de envergadura. La crisis económica, el aumento de la desigualdad social, los graves casos de corrupción y los recortes de la austeridad, aun con subidas de impuestos, son causas explosivas del malestar ciudadano, que se ha ido agravando con el paso del tiempo. Del espíritu de *fiesta* en los años de bonanza y crecimiento hemos pasado a una crisis dramática y a una desafección donde no se auguran ni brotes verdes ni horizontes resolutivos.

Durante estas dos últimas décadas, la Fundación Encuentro ha venido analizando e interpretando los distintos momentos de la realidad social española. En los diecinueve volúmenes publicados del *Informe España* se ha ido narrando y objetivando la cambiante realidad española, ofreciendo claves interpretativas a empresarios, académicos, políticos y ciudadanos. Estas referencias argumentativas son hoy más necesarias si cabe para interpretar el complejo momento presente. Esta serie de consideraciones pretenden ayudar y promover el debate sobre nuevos cambios y decisiones.

Ciertamente, España está mal y no va bien, pero no hay que caer en ningún tipo de tremendismo ni de frentismo simplificador que impida pensar salidas positivas y compartidas de futuro. La triple crisis de legitimidad, económica, política y social, que sufrimos ha de ser una oportunidad de catarsis reflexiva que nos ayude a resolver esta difícil encrucijada múltiple. Esta triple crisis nos interpela a todos sin excepción: a las élites políticas y financieras, a los partidos y sindicatos y a todos los ciudadanos en general. Porque, como ciudadanos corrientes, somos las principales víctimas de una crisis sistémica que ha puesto en evidencia la debilidad de nuestro modelo confiado de gobernanza. Ciudadanos confiados y acomodados a un modelo de instituciones, reglas, supervisores y líderes políticos que no eran tan fiables ni resolutivos como pensábamos. En consecuencia, la ciudadanía castiga ahora a los políticos con el desprestigio y los sitúa como el tercer problema del país, nada menos. Mientras, según recientes encuestas, otorgamos el máximo prestigio profesional y confianza a los profesionales sanitarios, los

profesores y las fuerzas de seguridad, figuras percibidas como garantes de bienestar y seguridad a la comunidad. Un contraste muy elocuente.

Los políticos y el modelo confiado de gobernanza son y han sido el resultado de nuestro orden institucional y cultural; por lo tanto, son el reflejo de nosotros mismos. De la perplejidad inicial hemos pasado a la decepción en cascada y acumulativa viendo empeorar las injusticias, los atropellos y las consecuencias de la crisis. Si no hay un estallido social de ira, tras la gran protesta del 15-M, es porque la sociedad española es más madura y contenida de lo que parece. Pasadas la perplejidad, la decepción y la protesta, vivimos ahora en tiempos propositivos gracias a la aparición saludable de nuevas plataformas, foros y colectivos que están renovando como nunca el debate de ideas y propuestas.

La europea España no puede soslayar el diálogo como herramienta básica de la vida democrática y ha de abrirse a las voces críticas que vienen del *demos* cívico. La lluvia de nuevas propuestas que están apareciendo desde las redes ciudadanas redefine el bien común y supone el inicio de una catarsis reflexiva y creativa para repensar los múltiples desafíos y poder abrir un nuevo ciclo distinto. Conviene estar atentos, escuchar, debatir y contrastar esta lluvia fina de propuestas, aunque no estén coordinadas ni entrelazadas entre sí.

Seguramente nos enfrentamos a un “cambio de época” con cierto retraso por haber obviado lo que eminentes sociólogos y pensadores (Touraine, Castells, Beck, Giddens o Crouch) ya enunciaron a inicios del año 2000. ¿Hemos sabido resolver los desafíos estratégicos que planteaban la globalización, la gobernanza multinivel, las soberanías compartidas, la posdemocracia o la *flexiseguridad*? ¿Hemos tenido líderes políticos, empresariales y periodistas capaces de plantear ese tipo de debates serios y trascendentales para nuestras vidas? ¿Nos hemos interesado como ciudadanos en leer pensamiento y prestigiar el rigor analítico o hemos sucumbido al deporte del “tertulianismo opinativo”?

Seguramente el país ha quedado adormecido en un “España va bien” demasiado complaciente, manteniendo viejos códigos y maneras de hacer que deberían haber sido superados antes. Ahora los deberes y exámenes se agolpan o vienen impuestos desde fuera con urgencia. Sin embargo, tampoco es saludable caer en una depresión que hiera la autoimagen como país asumiendo estereotipos que caricaturizan la compleja realidad. Las urgencias, los estereotipos subjetivos y las prisas nunca son buenas consejeras. Rigor analítico, realismo y templanza son criterios más necesarios que nunca y nos inspiran esta serie de consideraciones generales que pasamos a exponer.

1. Hacia un diagnóstico compartido desde el realismo crítico

Primera consideración: Sabemos que la situación es crítica y casi de emergencia, pero el hecho de haber tocado fondo ha de ser el revulsivo para salir del atolladero con un nuevo enfoque general y un nuevo relato de soluciones y proyectos.

Las dos consecuencias más trascendentes del malestar acumulado son la extrema desconfianza ante la clase política y el entramado institucional, por un lado, y la desesperanza ante la falta de un relato alternativo y resolutivo, por el otro. Son dos problemas que aquejan a muchos otros países como España, aunque aquí se muestren con más crudeza. Desde fuera parece retornar el viejo tópico sobre la incapacidad del pueblo español para gobernarse o dotarse de unas élites competentes y eficaces. Si la transición democrática española ha servido de ejemplo para muchos otros países y contextos, la actual crisis múltiple nos desafía a replantear un nuevo modelo de gobernanza y de arquitectura institucional más robusta y legitimada.

La España de 2013 tiene poco que ver con la España de 2000, de 1994 o de 1978. La sociedad española ha partido de muy abajo en todos los ejes troncales (gobernanza, competitividad, bienestar, educación, ciencia y virtudes cívicas), pero su salto relativo y su avance en las últimas décadas ha sido espectacular. Un avance a trompicones en unos casos, constante en otros y errático en cuanto a consolidar una sociedad civil potente e independiente. Ahora, en cambio, vivimos un efervescente renacimiento de colectivos y foros de debate que reclaman la apertura de una segunda transición o un nuevo proceso constituyente para acometer una regeneración real de las instituciones y modernizar España de nuevo. No obstante, es la primera vez que la demanda urgente de regeneración histórica se produce en un marco democrático y de libertades. Esto hay que remarcarlo. Es el gran desafío al que se enfrenta la treintañera democracia española en medio de una colosal crisis y de una globalización implacable que ponen a prueba su madurez. Una madurez que ha de dar otro salto cualitativo y adaptativo a algo mejor, si es capaz de desprenderse de viejos códigos, maneras y estilos que ya han caducado.

La situación excepcional que vivimos requiere altas dosis de realismo crítico, capaz de identificar las claves de bóveda más frágiles de nuestra arquitectura a fin de sustituirlas desde el consenso. Eso no implica arrasarlo todo o hacer tabla rasa. Implica un cambio de actitud y un reconocimiento serio y sensato de aquellas fatigas, problemas y fallos de estructura que han sido obviados o ninguneados como parte de una realidad incómoda o irresoluble. Reconocer la realidad con realismo crítico resulta difícil en tiempos en los que los medios de comunicación y las élites fabrican y crean marcos simbólicos muy potentes aunque superficiales. Algunos se han alejado tanto de la realidad real que llegan incluso a tratarla como un objeto extraño o a excusarse diciendo que la realidad les ha estropeado el programa electoral

de gobierno. Tierno Galván (1966) ya destacaba la afición de los españoles por la simplificación y el maniqueísmo, rehuendo y evitando las realidades complejas. No podemos reflejar la complejidad sin valernos del pensamiento complejo. Cuando afirmamos que la realidad social, económica y política es compleja pensamos en algo semejante a un tapiz cuyos hilos son todos significativos. Ceder a la simplificación es una forma de contribuir a la confusión. Nada hay tan insensato como pretender iluminar lo complejo con el pensamiento simple o simplista, aunque resulte tan atractivo por su claridad y tan idóneo para los medios de comunicación.

La prensa, la televisión y el resto de medios tradicionales, ¿están facilitando el análisis y el debate complejo de los problemas o caen en el espectáculo tertuliano, rápido y polémico para cautivar grandes audiencias? Las voces y expertos más solventes y completos, ¿tienen la difusión pública que requiere este momento? ¿Dónde están los intelectuales y académicos que antaño iluminaban los caminos y encrucijadas, presentando paradojas y contradicciones que nos exigían un esfuerzo ético y de reflexión? Son preguntas pertinentes ante unos tiempos que no admiten las respuestas fáciles, sino la reflexión seria y analítica de la realidad con todos sus pros y contras. No podemos rehuir por más tiempo la realidad compleja, soslayando nuestras contradicciones y dilemas endiablados o mirando para otro lado esperando que escampe. Es hora de realismo crítico y pragmático orientado hacia el futuro, pensado para las generaciones venideras. Ello nos exige un esfuerzo ético, intelectual y sensato por entender el presente sin dogmatismos ni prejuicios.

Desde el inicio de la crisis en 2008, miles de jóvenes han emigrado al exterior, iniciando una diáspora de profesionales jóvenes y cualificados que puede superar en proporciones a la registrada al término de la guerra civil. Son las dos únicas diásporas de capital humano cualificado en nuestra historia contemporánea. Aunque la primera conducía al exilio y la presente conduce a los mercados globales, ambas ejemplifican un fracaso y una pérdida como país. Buena parte de ellos manifiestan que no piensan volver. España los ha educado en su sistema educativo –injustamente vilipendiado–, pero su excelencia y su talento servirán para hacer más competitivos a otros países que les ofrecen oportunidades, bienestar y confianza. Justo lo que no encuentran aquí. ¿Cómo reconstruir un nuevo marco de confianza que sea creíble para poder recuperar a esta generación que se marcha del país tan defraudada?

La renovación institucional que merecen las futuras generaciones es, hoy, un ejercicio adulto de responsabilidad y de justicia intergeneracional. Para asentar y legitimar una nueva arquitectura institucional que sea duradera, conviene traspasar las fronteras partidistas y asumir los graves problemas desde el realismo crítico y sin maquillajes. Sólo entonces será posible construir consensos en espacios de diálogo multiagentes donde voces ex-

pertas jóvenes y seniors sean capaces de priorizar acuerdos estratégicos y de largo recorrido. Si los Pactos de la Moncloa (1977) fueron un punto de inflexión que permitió encajar la frágil y naciente democracia en un contexto de severa crisis económica nacional, es posible que el nuevo punto de inflexión que necesitamos ahora sea un pacto intergeneracional entre la España que asentó la democracia y las nuevas generaciones, que han de hacer frente a la globalización y al cambio permanente y que no necesariamente se organizan en partidos políticos.

Partir del realismo crítico supone reconocer la democracia pluralista y horizontal de voces y grupos informados que deliberan soluciones para el bien común de forma racional y realista. Supone desprendernos de apriorismos cómodos y estar abiertos a nuevos razonamientos que proponen soluciones en espera de consenso. No es hora de inmovilismos ni de temeridades, sino de debate reflexivo y urgente en torno a un marco compartido de diagnóstico de la realidad compleja. Vivimos un tiempo histórico, llamado de modernidad reflexiva, donde la ciudadanía es creadora de una nueva agenda política de abajo arriba, con base experta, animada por redes y que trasciende los partidos políticos. Es una consecuencia más del “cambio de época” característico de la sociedad del conocimiento, con una ciudadanía más informada y formada que poco tiene que ver con la ciudadanía propia de la pasada sociedad industrial.

La modernidad reflexiva es un cambio de paradigma de una democracia vertical y jerárquica a una democracia más horizontal y participativa. Nos preguntamos si la sociedad española está dispuesta o no a abordar tantos desafíos desde la discrepancia y el debate racional llegando a nuevos consensos básicos y necesarios. La crisis ofrece la oportunidad histórica de provocar un gran cambio cultural que resitúe a España en el mapa global y complejo de la modernidad avanzada. Sobra capacidad para hacerlo, pero falta un enfoque y un marco compartido para ponerse a ello.

No se trata de ponerse en manos de *spin doctors*¹ o expertos en *marketing* de marca, se trata de acordar un nuevo proyecto histórico que sea incluyente de la diversidad, asegure la confianza mutua y garantice el bienestar social siendo reconocible y creíble. ¿Tenemos visión de país y suficiente generosidad para atravesar las fronteras partidistas e ideológicas? Hemos demostrado ser competentes para asentar la democracia en España, incorporarnos a Europa y acometer una gran modernización has-

¹ “El término inglés *spin doctor* no tiene una clara traducción al castellano. En esencia, consistiría en la evolución del término ‘asesor electoral’ que se ha producido por las necesidades que se manifiestan en una nueva realidad donde prima más la forma de la comunicación que el contenido. Un *spin doctor* es el encargado de mostrar ‘la mejor cara’ del político al que asesora ante los ciudadanos-votantes y, por tanto, de sacar todo lo positivo de las facetas del mismo, así como de sus iniciativas, opiniones, apariencia y pasado”. <http://lafelizlengua.blogspot.com.es/2010/03/spin-doctor.html>

ta ahora, pero queda por comprobar si sabremos también construir una arquitectura compleja de convivencia y progreso para los nuevos tiempos venideros. Haber tocado fondo debería servir de revulsivo para salir del atolladero con realismo crítico, con pluralismo y con inteligencia incluyente.

2. Desterrar la política de exclusión y abrirse a la política de inclusión

Segunda consideración: La aceptación de la diversidad y la confianza mutua en sociedades cada vez más plurales, complejas y globalizadas son los dos grandes desafíos que pueden determinar el futuro. Si no somos tolerantes ante la diversidad social, política y cultural existente, no puede haber confianza mutua ni compromiso ni convivencia. Por esta razón, hay que desterrar las políticas de crispación y de exclusión que tanto deterioran la calidad del debate público, polarizando e impidiendo el diálogo racional entre diferentes.

El pensamiento simplista basado en el enfoque binario (bueno-malo, amigo-enemigo) ha sido nefasto en todos los sentidos y no ha propiciado un marco de interpretación y comprensión más exigente y elaborado. La reducción de la política a la destrucción del adversario y al cierre de fronteras hacia dentro de cada partido ha erizado múltiples disensos y ha abierto conflictos manufacturados allí donde no los había.

Los cambios desencadenados por la globalización y la sociedad del riesgo suponen que la agenda política doméstica se compone de temas cada vez más complejos que plantean múltiples dilemas de decisión. Para hacer frente a este escenario, las democracias más liberales y avanzadas están desarrollando nuevas formas de transparencia para rendir cuentas a unos ciudadanos cada vez más exigentes. Ciudadanos que, a su vez, reclaman más participación directa. Todo ello implica que se eleva el nivel del debate público, con lenguajes y conocimientos expertos que ya son asequibles para la mayoría. Los conflictos y problemas son deliberados y racionalizados de forma civilizada y educada. La democracia exigente es la contraparte de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, en España las estrategias de exclusión y de frentismo binario han socavado las bases mínimas del diálogo deliberativo que facilitan el clima para construir acuerdos y consensos. Cuando hacía falta más pragmatismo ilustrado y más inteligencia incluyente, se ha respondido con estilos y estrategias maximalistas que dividen y polarizan.

El pragmatismo ilustrado implica hacer política realista basada en evidencias, tomando decisiones tras un cálculo analítico de las consecuencias en el que también ha de participar la ciudadanía. Nadie ha de ser ajeno

a los datos, al *open data* y a la transparencia de las decisiones y de las cuentas públicas. Trasladado a la cuestión territorial, implica publicar anualmente las balanzas fiscales entre autonomías, por ejemplo, como un instrumento analítico y necesario que contribuya a mejorar el conocimiento de cómo funciona realmente la solidaridad interterritorial en España. La opacidad y la confusión en este ámbito pervierten y deforman el debate territorial y las percepciones de justicia o injusticia distributiva de las distintas comunidades autónomas del llamado modelo común (excluidas Navarra y País Vasco). Es hora de resolver los agravios comparativos y las situaciones injustas que han cercenado la cooperación mutua a partir de tópicos contruidos desde la escasa transparencia.

Tampoco parece sostenible, ni de justicia, un modelo de financiación autonómico que repercute negativamente en aquellas comunidades autónomas que son aportadoras netas. El llamado Arco Mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia) produce más del 35% del PIB español y del 50% de las exportaciones, siendo uno de los motores económicos clave para asegurar la recuperación económica. No puede ser asfixiado por un modelo de financiación que le perjudica con más endeudamiento y menores servicios públicos. ¿Existe liderazgo para construir un nuevo consenso territorial cuando se han exacerbado los localismos, se ha abierto el desafío soberanista catalán tras sembrar anticatalanismo y se sueña con recentralizar el Estado como una solución mágica de autoridad? ¿Cómo vamos a construir un relato común si no reconocemos la España plural y multinivel, compuesta de interdependencias y asimetrías reales? Desde la opacidad o la demagogia será imposible hacerlo.

Es posible afirmar que la bonanza económica a partir de la entrada en el euro (2000-2008) impidió un debate nacional riguroso sobre los desafíos y debilidades de España ante la globalización. El debate del encaje territorial de España hay que plantearlo conectado con las implicaciones que se derivan de la globalización, la gobernanza multinivel y las soberanías compartidas. Otros países avanzados y nuevos países emergentes sí fueron capaces de plantear el debate sobre la globalización, requisito que les ha ayudado a posicionarse y a adaptarse mejor al nuevo contexto y a la nueva época. Es el caso de Alemania.

La inversión en educación, conocimiento y capital humano como una prioridad de Estado, asumida por derechas e izquierdas, ha sido una constante en dichos países, pero no en España. Otra demostración de pragmatismo ilustrado al que llegamos tarde y mal, si no revertimos los graves recortes en educación, ciencia y universidades acaecidos en los dos últimos años. Tampoco ayuda la reciente reforma educativa (séptima gran ley educativa de la democracia), que nos demuestra de nuevo la inestabilidad normativa y el disenso continuo sobre la educación moderna que necesitamos como país competitivo y cohesionado. ¿Seremos capaces de lograr un gran pacto

de Estado que deje la educación, la ciencia y las universidades fuera de la disputa partidista y pasen a convertirse en una prioridad común?

Otros países lo han conseguido y nos toman ventaja competitiva sin encallarse en polémicas ideologizadas ante un asunto tan serio y estratégico como es la educación. Desde el año 2000, la mejor política económica y social en manos de los Estados es la política educativa y la inversión en capital humano. En estos trece años, mientras la mayoría de los países no han reformado su marco normativo general, España ha visto aparecer hasta tres reformas educativas (LOCE, LOE y LOMCE), en una espiral que recuerda el esfuerzo cíclico de Sísifo. El viejo lema del regeneracionismo de finales del siglo XIX que decía “escuela, despensa y siete llaves para el sepulcro del Cid” parece recuperable para hoy en día, instalados en sociedades digitales y del conocimiento donde la educación es la pared maestra de la competitividad económica y de la calidad democrática. En lugar de modernizar un sistema educativo potente para las exigencias del año 2030 desde el consenso, el diagnóstico compartido y el pacto, se recurre al vaivén continuo de leyes educativas que responden a divisiones ideológicas insuperables. ¿Existe liderazgo civil o un patriotismo constitucional *habermasiano* que rescate la educación de la lógica partidista y efectista?

El patriotismo constitucional formulado por Jürgen Habermas no consiste en convertir el texto constitucional en un territorio blindado y defensivo que excluye y marca divisorias de amigo-enemigo. Como afirma el propio Habermas, implica todo lo contrario. No es posible mantener vivo el consenso constitucional desde posturas belicosas o lecturas siempre restrictivas. No es posible respetar su espíritu de concordia y convivencia si se abren campañas de “catalanofobia” o de “andalucifobia”. El patriotismo constitucional no viene dado por haber nacido aquí o allá. Son los valores del pluralismo y la inclusión democrática de la diversidad los que nos hacen sentirnos orgullosos de pertenecer a la misma comunidad política que nos respeta como ciudadanos libres y diferentes. ¿Estamos dispuestos a formular políticas de inclusión de la diversidad y a resolver las luchas de identidad que se han desbocado? ¿Hay que responder con inteligencia incluyente o con maximalismo esencialista?

3. El consenso por la reforma y democratización de los partidos políticos

Tercera consideración: El gran reto de las democracias es la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de una ciudadanía representada por partidos políticos abiertos y regulados por ley.

Hemos sabido construir instituciones de Estado con legitimidad y arquitectura democrática, pero apenas hemos educado y formado una ciudadanía de demócratas. José Luis López-Aranguren murió (1996) diciendo que aquí hay mucha democracia, pero sin demócratas. Hemos otorgado grandes poderes a los partidos políticos sin construir una cultura de lo público ni una ética democrática. Carecemos de valores comunes y compartidos, que deben regir lo público o, como se dice ahora, el bien común o “procomún”.

Seguramente, en ese aspecto Cataluña es singular y ha prevalecido un *demos* cívico y una cultura democrática con una gran tradición de pacto transversal y *entesa* (acuerdo) que no se ha sabido apreciar suficientemente desde el resto de España. Aplicar el uniformista “todos somos iguales” nos impide objetivar las diferencias históricas y sociológicas existentes. De hecho, la complejidad de la sociedad catalana y su sistema de partidos tiene poco que ver con el *demos* político de la sociedad extremeña, madrileña o asturiana, por ejemplo. A pesar de esta singularidad, la cultura y la educación democrática han de mejorar en todas partes, y habría que reformular los significados del bien común, que nos debería responsabilizar como conciudadanos.

Los consensos son los únicos caminos que pueden proponerse en una política democrática. El momento presente exigiría ese clima de consenso entre partidos políticos, plataformas y entidades de la sociedad civil en un esfuerzo común para salir juntos del atolladero. Sin embargo, está por ver cómo puede liderarse tamaña empresa cuando los partidos políticos asocian el pacto con una debilidad o un signo de flaqueza y que sólo se materializa cuando conviene a sus propios intereses y no a los intereses del país. En cambio, en España, los disensos no sabemos ni siquiera soportarlos. Aquí los disensos se convierten en enemistades, en polémicas y en descrédito del adversario. Sea en el terreno político, periodístico o académico, el exceso narcisista y las egolatrías nos impiden reconocer lo positivo del oponente y tratarle con deferencia asumiendo las ideas valiosas que son mejor que las propias. Predomina el tremendismo trágico y dogmático en lugar de la *finezza* civilizada y dialogada.

Aun con todo, parece que empieza a hilvanarse cierto consenso sobre la conveniencia de una nueva Ley de Partidos, que sería el nudo gordiano de muchos otros cambios. En 2013 han aflorado numerosos colectivos, plataformas y foros que han ido agregando nuevas voces al debate público por una democracia “redemocratizada”. Esta revitalización de la participación civil ha abierto una fase de diagnóstico plural muy saludable, que oxigena y enriquece la vida política. Se reclama más calidad democrática, más transparencia y rendición de cuentas y más capacidad de decisión directa. Son propuestas realistas y necesarias que no pueden decidirse en la penumbra o entre las bambalinas del poder; más bien han de ponerse en el centro del ágora pública para deliberar qué consenso reciben.

El Congreso de los Diputados hizo públicos sus presupuestos en mayo de 2013, algo que no hacía desde 1982. El ágora de la palabra y la democracia ha permanecido todo este tiempo opaca y distante en su funcionamiento interno, sin apenas progresar en nuevas formas de transparencia y participación directa. Incluso las iniciativas legislativas populares (ILP) acaban frustradas tras recorrer una difícil carrera de obstáculos y formalismos. La deliberación de los grandes y pequeños asuntos públicos no puede continuar blindada y amordazada por unas minorías dirigentes surgidas por la ley de hierro de los partidos. El ágora pública formada por nuevas voces y foros emergentes es propositiva de nuevos cambios y no es meramente declarativa y retórica.

Los partidos políticos se enfrentan a la paradoja de ser a la vez enfermos y doctores en medicina, han de reconocer su crisis de legitimidad y aprobar qué tratamiento de cura han de seguir. Muchas organizaciones e instituciones llevamos años reclamando una nueva Ley de Partidos que posibilite recuperar la política desde y para la ciudadanía, permitiendo la selección meritocrática de sus cuadros dirigentes, el debate de ideas y la formación permanente y la democracia interna abierta a la ciudadanía. ¿Cómo encaran esta demanda los actuales partidos mayoritarios que corren el riesgo de verse superados por el ansia ciudadana de regeneración? En estos tiempos, los ciudadanos no son ni súbditos ni subordinados a quienes proteger o apadrinar, sino sujetos reflexivos y críticos que asumen la realidad compleja y reconocen los riesgos a los que se enfrentan como sociedad y como comunidad política. No tiene sentido perpetuar el paternalismo del pasado ni limitar la participación cívica al voto electoral tras costosas campañas que son más mediáticas que sustanciales.

Durante el último año se ha expandido por las redes sociales un debate sobre las élites extractivas para entender la singularidad del caso español y de otros países postautoritarios donde coexiste una clase dirigente acoplada a las prebendas del Estado y una débil sociedad civil que lo consiente. El viejo caciquismo español tan criticado por Joaquín Costa parece revivir remozado en pleno siglo XXI sin que hayamos tenido el coraje cívico de desmontarlo y superarlo. Ciertamente, la lógica caciquil es perversa y corruptora. Reproduce el paternalismo tradicional que establece unas relaciones de poder clientelares y extendidas como una malla capaz de dominar pueblos y ayuntamientos enteros. El propio interés, la indiferencia por los demás y la subordinación a quien manda son rasgos muy propios de un determinado perfil de ciudadanos sin aspiraciones ni espíritu de responsabilidad por el bien común. Es un rasgo cultural que hay que eliminar y superar.

Según el último Barómetro del CIS (abril de 2013), las tres principales preocupaciones de los españoles son el paro, la corrupción y los políticos. Una combinación muy preocupante y explosiva. Tanto la acción del Gobier-

no como el ejercicio de la oposición se saldan con un rotundo suspenso, que empieza a reflejarse en sondeos electorales que predicen el fin del bipartidismo. El resquemor por el modelo confiado de gobernanza y la dura situación de crisis económica nos instala en un clima de pesimismo casi sin horizontes, expresado en ese 70% de españoles que pronostican un peor nivel de vida para sus hijos. ¿Queremos revertir ese pesimismo adoptando medidas consensuadas que refuercen la calidad de nuestra gobernanza democrática? ¿Bajo qué nuevos criterios ciudadanos, éticos y profesionales queremos seleccionar a los políticos del futuro?

Los sueldos astronómicos y opacos de los cargos públicos, el excesivo poder casi presidencial de los alcaldes, las obras faraónicas sin utilidad y la maraña de asesores y “colocados a dedo” en las Administraciones y empresas públicas, completan un panorama inaceptable, pero muy trabado, resistente y opaco. Manuel Vitoria acierta de lleno cuando concluye que España no tiene un problema de corrupción sistémica ni expandida entre las empresas o entre los funcionarios públicos (policías, médicos o profesores), sino un serio problema de corrupción política muy focalizado y bien percibido por la ciudadanía. El modelo confiado de gobernanza ha acabado generando anomia disruptiva de las reglas establecidas, pero no ha llegado a pervertir la corriente principal de la ciudadanía decente. Aun con tanta anomia, mantenemos un orden dañado y lleno de desconfianza pero que no deriva en ruptura violenta. Superar tanta desconfianza institucional implica introducir nuevos mecanismos de control, transparencia y auditoría que disuadan toda corrupción en los asuntos públicos.

Las virtudes cívicas, la excelencia, la ejemplaridad y el mérito se educan desde la política y no sólo desde la escuela, la familia o la pequeña comunidad. Ahora bien, si queremos impulsar un nuevo círculo virtuoso, debemos también ser conscientes de que las virtudes cívicas y los nuevos compromisos nos atañen a todos. De ahí que sea necesario remarcar que ganamos todos si pasamos a ejercer una ciudadanía implicada, solidaria y responsable, capaz de modernizar su armazón institucional, sus partidos políticos y su cultura democrática.

4. Las fortalezas de una ciudadanía responsable

Cuarta consideración: La triple crisis económica, institucional y social también es una crisis moral que ha de cuestionar a fondo los valores que la han precipitado, proponiendo un nuevo círculo virtuoso impulsado desde una ciudadanía más crítica y responsable.

Se nos dice que todos hemos vivimos muy por encima de nuestras posibilidades, lo cual no es cierto si con ello se quiere responsabilizar de la crisis

a los ciudadanos corrientes. Hay una clara jerarquía de responsabilidad, en cuya cima están las élites de codicia que han actuado sin ninguna ética ni moral, aunque muchos de ellos profesen la fe cristiana o se hayan formado en las altas escuelas de negocios. En paralelo, hallamos otra jerarquía o pirámide de sacrificio, cuya base inferior está formada por familias que se han quedado sin recursos, sin trabajo y sin vivienda. Muchos de ellos provienen de las clases medias y han sido pequeños emprendedores que hipotecaron sus redes familiares y con esta crisis han caído todos ellos en el peor atolladero.

Ahora padecemos el empobrecimiento y el súbito descenso social. Es la consecuencia no querida o imprevista por haber permitido la desregulación financiera. La industria financiera global nos ha inundado de crédito fácil y también de créditos de alto riesgo y productos complejos, que han actuado de combustible inflamable de la “burbuja”. Todo un ceremonial de irresponsabilidad organizada –como diría Ulrich Beck– en el que no ha habido ni supervisión ni prevención. Tal y como se ha demostrado, la codicia extrema de unas minorías es la negación de todos. En el cénit de la arrogancia, hubo economistas que crearon en 2005 el concepto de “plutonomía” como un ideal de nuevo gobierno de los super-ricos ante una democracia empequeñecida y sin casi derechos.

La economía especulativa acabó instaurando la cultura del pelotazo como un sistema de valores que prestigiaba el éxito del enriquecimiento rápido, el consumismo fácil y el *darwinismo* más individualista. Ese individualismo posesivo erosionó las relaciones comunitarias y solidarias, pero ahora recula en favor de su contraparte, con la reaparición del sentido colectivo, la ayuda mutua y la cooperación, tal y como destaca Richard Sennett. Ese movimiento pendular lo han protagonizado las clases medias, que ahora redescubren la necesidad de la cohesión social y del rearme moral bajo nuevos principios: el castigo a corruptos y corruptores, la gobernanza eficiente, la transparencia política y la justicia social. Son valores más potentes, asumidos por una ciudadanía más crítica e irritada, que ahora reclama una nueva arquitectura de la responsabilidad.

Una nueva arquitectura que comienza por pagar los impuestos y asumir nuestra responsabilidad fiscal como conciudadanos de una comunidad. Las clases medias mayoritarias, pero frágiles, son las que soportan la mayor carga del sistema fiscal español a través de su trabajo. Tenemos un modelo tributario poco eficaz que recauda menos que Grecia, con un 36% del PIB y muy por debajo de la media europea (46%), aunque mantengamos uno de los tipos de IRPF más elevados de Europa. Los grandes patrimonios y las grandes compañías quedan exentos de un mayor esfuerzo fiscal y el Estado se resiente por ello con menos ingresos. Se socializa un modelo injusto e irresponsable que denota la poca implicación de los grandes patrimonios con el devenir marchito del país. Mientras en otros países los más ricos han

propuesto que se les suban los impuestos –como pidieron Warren Buffett o Bill Gates, por ejemplo–, aquí no hemos tenido una muestra similar de responsabilidad moral.

Una nueva arquitectura de la responsabilidad supone también reducir el exceso de economía sumergida, que se mantiene en torno al 25% del PIB y que perjudica a los sectores y profesionales que sí cumplen sus obligaciones y las reglas del juego manteniendo los cimientos del bien común. Basta ya de elogiar el fraude, la picaresca y las trampas ventajistas por el provecho propio. Son rasgos culturales que restan. Hay que trabajar y ser competitivos cumpliendo las reglas del juego. Sin engaños ni maquillajes contables de ningún tipo. ¿Cómo nos pueden ver en Alemania cuando en España consentimos las deudas millonarias de los clubes de fútbol con el Estado mientras compiten con equipos europeos cumplidores de sus obligaciones fiscales? ¿Cómo podemos cambiar la imagen externa y la marca España cuando desde fuera perciben que no nos tomamos en serio las reglas del juego?

Una nueva arquitectura de la responsabilidad ha de implicar también al sector financiero para resolver el drama de los desahucios. ¿Podemos consensuar que ninguna familia de ingresos medios y bajos pague más del 20% de su renta por las hipotecas contraídas? Sólo esa medida podría liberar más de 40.000 millones que contribuirían a reanimar la demanda interna. La emergente sociedad civil que se mueve por las redes sociales digitales está formulando multitud de nuevas propuestas alternativas que merecen ser escuchadas y atendidas. La perplejidad, la decepción y la indignación son colosales y remiten a una reflexión en profundidad ante los excesos cometidos y los injustos costes repercutidos después.

La prolongación de cuatro años más de crisis, anunciada por Angela Merkel en la cumbre de Davos de enero de 2013, parece confirmarse desde diferentes agencias y observatorios. El escenario poscrisis nos puede situar en 2017 con el nivel de riqueza según el PIB de 2007 y con el nivel de empleo de 2003. Una gran recesión traducida en más de una década perdida y una dualización social sellada con el mayor incremento de las desigualdades sociales de la historia reciente. Un castigo inmerecido para todos, especialmente para los jóvenes y las nuevas generaciones, a los que dejamos una mala herencia. La pirámide de sacrificios que produce la crisis económica y las políticas de austeridad están socavando el modelo de cohesión social y, por ello, se requiere un gran pacto fiscal y social que redistribuya los costes de la crisis. ¿Estamos dispuestos a pactar una nueva arquitectura de la responsabilidad entre capital y trabajo, entre representantes y representados, entre grandes patrimonios y desahuciados, entre cumplidores éticos y aprovechados?

Una nueva arquitectura de la responsabilidad también supone un nuevo pacto moral que empodere y responsabilice a los individuos y a la

sociedad civil al margen del Estado. No todo bien público ha de ser asumido y garantizado por el Estado. El altruismo y la función cohesiva que desempeñan el Tercer Sector o el voluntariado es un claro ejemplo del amplio espacio de acción y compromiso que se abre para que los ciudadanos contribuyan al bien común. Quizás hemos heredado del franquismo, por sus propios excesos y defectos, un pronunciado paternalismo que nos hace esperar todo del Estado benefactor.

Las nuevas teorías de la *predistribución*² siguen defendiendo la necesidad de mantener sistemas públicos de bienestar, pero añaden una nueva función del Estado como instrumento preventivo de las desigualdades para que el posterior gasto social y redistributivo sea menor. De aquí la importancia que tiene el diseño institucional del sistema educativo o la política de becas para compensar las desigualdades de origen. Así como las políticas laborales que procuran sueldos dignos y condiciones más estables de trabajo o los programas de reparto del tiempo de trabajo en contextos de alto desempleo. Generar menos desigualdad es *predistribuir* de forma más eficaz para que la posterior redistribución sea más efectiva y mejor focalizada. Equidad, eficiencia y excelencia han de ser objetivos compatibles y viables del sistema educativo, del sistema laboral y del sistema de bienestar.

Una nueva arquitectura de la responsabilidad supone también que cambiemos nuestras pautas horarias y la mala gestión del tiempo. Hace falta racionalizar los horarios para adaptarnos al huso horario de Greenwich que nos fue cambiado en 1942 contra toda lógica y tradición. El desorden horario y la mala gestión del tiempo que mantenemos por inercia cultural nos restan eficacia, productividad y posibilidades de conciliación familiar. Racionalizar los horarios supondría un cambio de hábitos sociales y un mayor impulso para optimizar el tiempo personal. Más tiempo para dedicarlo a la familia, para leer y cultivarse, para mejorar la cualificación profesional o para participar más y mejor en la vida asociativa y en la vida política. Más tiempo para fortalecer las relaciones de mutua confianza y forjar una vida comunitaria más rica y plena.

Tras diez largos años de sensibilización por parte de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles³, parece llegado el momento de resolver esta incómoda herencia. ¿Tendría un impacto positivo a escala internacional anunciar el cambio de huso horario de España acompañado de todo un paquete de nuevos consensos y medidas regeneradoras? ¿Estamos preparados para dar tantos pasos de envergadura que transmitan

² La *predistribución* es “una expresión acuñada por el politólogo de la Universidad de Yale Jakob Hacker, y hecha famosa en Europa por el líder laborista inglés Ed Miliband”. En www.eldiario.es/agendapublica/blog/Redistribucion-Predistribucion-Parte_6_60953927.html

³ Véase la Parte Segunda del presente Informe, “Por unos horarios más sociales”.

como principal mensaje esta nueva arquitectura española de la responsabilidad?

En suma, llegar a acuerdos de mutua responsabilidad crearía las dinámicas de un nuevo círculo virtuoso y beneficioso para todos, superando muchas de las patologías y deficiencias que ahora nos indignan. Supondría un rearme moral y toda una respuesta reflexionada y consensuada a una crisis que ha transformado nuestras vidas y nuestro porvenir.

5. La renovación institucional que hemos de decidir

Quinta consideración: En conclusión, conviene impulsar un revulsivo real y creíble que no puede ser diseñado únicamente desde arriba y de espaldas a los ciudadanos. La vida democrática no es sino pacto o –como algunos han señalado– un equilibrio armónico de frustraciones mutuas.

Para asentar y legitimar una nueva arquitectura institucional de la responsabilidad que sea duradera, conviene traspasar las fronteras partidistas y asumir los graves problemas desde el realismo crítico que ha de conducir a un amplio consenso social.

Razonar, llegar a compromisos sensatos y transaccionar es la práctica viviente que permite a la misma democracia tener continuidad, readaptarse y autopreservarse. Más que pensar la democracia en términos y metáforas del mundo físico-mecánico (construcción, ingeniería política...), quizás convendría ayudarnos de metáforas del mundo biológico, que tienen más sentido para abordar la actual complejidad (redes fluidas, mutación, metamorfosis...). Todos los indicadores y constataciones nos inducen al *rebuilding* o remozamiento de nuestro modelo de gobernanza. Pero éste no será posible si antes no lo concebimos como un entramado vivo que depende de la cooperación, la complementariedad y la calidad de las relaciones mutuas. De ahí la necesidad de un giro en las actitudes, en las maneras de hacer y en las formas de relacionarnos con los oponentes, que no enemigos. De ahí la necesidad de un cambio cultural que sea transversal e impregne nuevos estilos y lenguajes de política inclusiva y respetuosa en la que volver a confiar.

Ciertas proyecciones elevan hasta el 40% la tasa de pobreza en 2022 en caso de continuar bajo las políticas estrictas de austeridad marcadas desde Bruselas. Más grave será la situación si el actual Gobierno rebaja el volumen de gasto público hasta el 38% del PIB en un claro retroceso que nos situaría al nivel relativo de gasto de 1984. Si fuera así, se dejarían al descubierto múltiples necesidades sociales, educativas y asistenciales que nos pueden volver a colocar en el furgón de cola de la Europa social y avanzada. La ruptura del contrato social y el incremento de las desigualdades sociales

no sólo socavan el modelo de cohesión social y erosionan los derechos de bienestar, sino que también debilitan la competitividad futura de la economía. Ni la democracia ni el mercado pueden aceptar tanta desigualdad. Los más acomodados y conservadores ante el cambio, ¿son conscientes de la gran fractura social que se abre a sus pies ante la cual no pueden ser indiferentes ni simplificarla o banalizarla? ¿Cuál es su compromiso ante los dilemas y encrucijadas que les plantea esta realidad tan crítica?

La renovación institucional y la creación de consensos implican una redistribución del poder y nuevos equilibrios pactados. Una redistribución más justa y eficiente. Una redistribución realista que tenga en cuenta el bien común como interés general. La inercia corporativista que acumula España a causa de su trayectoria de modernización tardía puede ser un gran obstáculo en este empeño. Una inercia con núcleos de intereses y privilegios que hoy están cuestionados, pero que mantienen su estancamiento y, lo que es peor, casi el impedimento de ser reformados.

No es extraño que determinadas reformas impuestas desde Bruselas consistan en eliminar ciertos residuos corporativistas que aún perviven. La supervisión externa los deja en evidencia y descubre muchas ineficiencias intocables que ahora se resuelven por dictado. ¿Seremos capaces de redistribuir el actual esquema de cuotas y relaciones de poder? ¿Sabemos ya cuántas cesiones, transacciones y frustraciones mutuas debemos priorizar? La sociedad española, ¿está madura para acometer tantos desafíos desde nuevos pactos y grandes consensos?

Hasta aquí las consideraciones y preguntas abiertas. Esperemos que esta modesta reflexión sirva para situarnos ante los difíciles dilemas que tenemos planteados. Los dos últimos gobiernos han evitado el temido rescate. Ahora es el momento de la ciudadanía reflexiva, para que encauce el necesario *diálogo reconstituyente* que tanta falta hace. Confiemos en que la sociedad española sabrá afrontar con inteligencia y templanza los desafíos que tiene planteados. Acumula sobrada capacidad para hacerlo.

La triple crisis de legitimidad, económica, política y social, que sufrimos interpela a las élites políticas y financieras, a los partidos y sindicatos y a todos los ciudadanos. Hemos de lograr un diagnóstico compartido desde el realismo crítico. Es una oportunidad para redefinir y avanzar hacia una ciudadanía responsable y hacia un modelo de sociedad y política basado en la renovación institucional.

Los horarios españoles constituyen una excepción en Europa. Urge reflexionar y tomar decisiones sobre un aspecto, sobre todo en el ámbito laboral, que introduce claras disfunciones sociales y económicas. Es hora de superar tópicos idiosincráticos y climáticos y acometer una tarea que atañe principalmente a las Administraciones Públicas, las empresas y los medios de comunicación.

Las mujeres están resistiendo mejor la crisis en el ámbito laboral, tras su mayor esfuerzo educativo durante décadas. En las esferas de poder y toma de decisiones los progresos son mucho menores y más lentos. No obstante, el reto de la igualdad se juega hoy principalmente en una participación equitativa de los hombres en los trabajos reproductivos y de cuidados en el ámbito de la familia.

Los jóvenes de hoy –los de la “generación premeditada” y “los hijos tesoro”, la “generación mejor preparada de nuestra historia”– se enfrentan a un contexto inédito, en el que deben aprender a tomar sus propias decisiones. Difuminado el horizonte de “gran futuro” que se les prometió, buscan nuevas orientaciones, pero nadie se las ofrece. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a poder hacer? ¿Cómo lo van a hacer?

La crisis ha concedido un renovado protagonismo a las personas mayores. Son cada vez más, más longevas y más decisivas, tanto en la economía como en la sociedad. Esta nueva situación plantea nuevos retos en las relaciones intergeneracionales y en la participación social y política. Sin olvidar las incertidumbres respecto a ámbitos tan básicos como las pensiones y la sanidad.

Tras una etapa de crecimiento, en gran medida a la sombra de las Administraciones Públicas, las organizaciones del Tercer Sector afrontan el reto de la madurez en un nuevo escenario. La independencia, la corresponsabilidad y la transparencia son aspectos fundamentales en un sector clave para la promoción de una ciudadanía más comprometida y más fuerte para dar respuesta a los “perdedores” del sistema.

El estallido de la burbuja inmobiliaria ha supuesto la quiebra de un modelo residencial insostenible desde un punto de vista económico y también social. Urge una reinención de nuevas políticas de vivienda más acordes con las circunstancias actuales. La dimensión social de la vivienda debe ser el fundamento para la futura reorientación del sector desde la demanda.

